



SENTENCIA

| | |
|------------|--|
| PROCESO | Ordinario laboral |
| DEMANDANTE | Jaime Alberto Villa Gil |
| DEMANDADO | Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Colpensiones EICE y Nación - Ministerio de Defensa |
| RADICADO | 05 001 31 05 013 2021 00109 01 |
| TEMA | Ineficacia de la vinculación al ISS |
| DECISIÓN | Confirma sentencia |

Medellín, cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anunciada, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín procede a resolver el recurso de apelación interpuesto en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adopta el proyecto presentado por el magistrado ponente, que se traduce en la siguiente sentencia.

Previo a ello, se aceptan las renunciaciones de los apoderados de Colpensiones, Fabio Andrés Vallejo Chanci con TP 198214 CSJ, y del Ministerio de Defensa, Laura Cristina Rubiano Polanco, portadora de la TP 353541 CSJ, por cumplir las exigencias del artículo 76 del CGP. Y se reconoce personería a la abogada Claudia Paulina Clavijo Pachón con TP 154698 CSJ, para representar a Mindefensa en los términos del poder conferido, conforme al artículo 74 *ibidem*.

Pretensiones

El demandante solicitó que se declarara la ineficacia del acto por el que fue vinculado por EPM al RPMPD administrado por el ISS hoy Colpensiones; que era un afiliado voluntario, facultativo u opcional al sistema general de pensiones y, por tanto, tenía derecho a permanecer en EPM como entidad encargada del reconocimiento y pago de su pensión de jubilación. En consecuencia, que se condenara a EPM a reconocer y pagar esta prestación de conformidad con la Ley 33 de 1985, por acreditar 20 años de servicio y el cumplimiento de 55 años

de edad el 22 de diciembre de 2012, calculada con el promedio del 75% de lo devengado en el último año de servicios, junto con las mesadas adicionales; las costas procesales y la indexación de las condenas. Además, que se estableciera que Colpensiones no está obligada a pagar la pensión de vejez, y con relación a los dineros ya cancelados por esta entidad, que sean compensados.

En subsidio, solicitó que se dispusiera que, para los servidores públicos las normas aplicables en materia de transición son las establecidas en los artículos 45 del Decreto 1748 de 1995, 5.º y 6 del Decreto 813 de 1994 y 26 del Decreto 1513 de 1998. En consecuencia, que se condenara a EPM a pagarle la pensión de jubilación regulada por la Ley 33 de 1985, desde el 22 de diciembre de 2012 junto con las mesadas adicionales hasta que Colpensiones asumiera su pago, a partir de los 60 años de edad, siendo entonces una pensión compartida en la que continuaría a cargo de EPM el mayor valor de la mesada pensional, si lo hubiere.

Hechos

Como supuestos fácticos relató que nació el 19 de noviembre de 1951 y a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, (30 de junio de 1995) tenía más de 40 años; que desde el 13 de septiembre de 1982, ostentó la calidad de trabajador oficial por estar vinculado a EPM y su empleador era el encargado del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985; que era un destinatario facultativo, opcional o voluntario del sistema general de pensiones, ya que al 30 de junio de 1995 se encontraba como funcionario activo en ejercicio de sus funciones vinculado a EPM y no pertenecía a ninguna caja, fondo o entidad de previsión social, y que pese a ello, no le dieron la posibilidad de que su empleador se hiciera cargo de su prestación, como entidad pública responsable de conformidad con la Sentencia C-584 de 1995, la cual declaró exequible condicionalmente el inciso 3º. del artículo 128 de la Ley 100 de 1993.

Indicó que ni su empleador ni el asesor del ISS le brindaron información clara, precisa, completa, concisa y comprensible sobre las implicaciones de vincularse al sistema general de pensiones y que,

además, no presentó manifestación expresa y escrita sobre su deseo libre y voluntario de seleccionar el RPMPD, formalidad establecida en el literal b) del artículo 13 y 128 de la Ley 100 de 1993, para emitir un consentimiento informado y libre de vicios, pues si le hubieran informado los aspectos relacionados con el reconocimiento pensional no se hubiera vinculado al ISS.

Afirmó que EPM en contra de lo establecido en los artículos 13, 128, 271, 272 y 288 de la Ley 100 de 1993, el que dice en su introducción que *“dicho sistema será opcional para los actuales trabajadores de los sectores públicos...”*, tomó la decisión unilateral de afiliarlo al ISS, fundamentando su decisión en el silencio del demandante y aplicando el artículo 25 del Decreto 692 de 1994, sin considerar que es un trabajador activo desde 1974 y se vinculó a la empresa antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que tiene derecho a la pensión de jubilación que reclama a cargo de EPM.

Expuso que el ISS mediante Resolución 147477 del 2 de noviembre de 2014, le reconoció la pensión de vejez en cuantía de \$1.363.011, en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, bajo lo previsto por la Ley 33 de 1985, por haber acreditado más de 20 años de servicio y 55 años, la que fue dejada en suspenso hasta que se acreditara el retiro definitivo del servicio, y su ingreso base de cotización fue calculado con el promedio de los últimos 10 años, al que se le aplicó una tasa de remplazo del 75%. Anotó que en dicho acto administrativo no tuvo en cuenta el régimen de transición establecido en los artículos 45 del Decreto 1748 de 1995, 5.º y 6.º del Decreto 813 de 1994 y 26 del Decreto 1513 de 1998, y bajo esa hermenéutica errada le reconoció la prestación antes del cumplimiento de los 60 años. De acuerdo a ello, EPM debió reconocer la prestación de conformidad con la citada Ley 33, hasta que el ISS asumiera la pensión de vejez con el carácter de compartida. Igualmente destacó que, en la sentencia CSJ SL, 24 may. 2011, rad. 40226, MP Mauricio Burgos Ruiz, se aplica este régimen de transición.

Manifestó que, de conformidad con la certificación laboral expedida por EPM, devengó en su último año de servicios un salario promedio mensual de \$2.591.190, donde al aplicarle un monto del 75%, se

obtiene una mesada pensional para el año 2014 por valor de \$1.943.392.

Finalmente mencionó que presentó derecho de petición ante EPM y Colpensiones solicitando las pretensiones reclamadas, las que fueron negadas por las entidades.

Contestación

Colpensiones

Afirmó que eran ciertos los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del actor, su vinculación con EPM, que al 30 de junio de 1995 se encontraba activo como servidor público, lo devengado en el último año de servicios, la reclamación presentada y su respuesta negativa; que no son hechos los relacionados con la aplicación de las normas y jurisprudencia que invoca; que no le consta lo dicho sobre la no vinculación a caja, fondo o entidad de previsión social al 30 de junio de 1995, ni sobre la decisión de EPM de vincular al actor al ISS de manera unilateral, ni el reconocimiento de prestaciones por EPM, y sobre los demás manifestó que no son ciertos.

Se opuso a las pretensiones de la demanda dirigidas en su contra y propuso como excepciones de mérito las que denominó: validez y eficacia de la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, prescripción, imposibilidad de condena en costas, buena fe de Colpensiones, compensación y la innominada o genérica.

EPM ESP

Señaló que no es cierta la fecha de nacimiento del actor; que al 30 de junio de 1995 no contaba con más de 40 años; que no es un destinatario facultativo del sistema de pensiones; ni que EPM debió reconocer su pensión de jubilación; ni la forma en que debe calcularse el IBL; ni que a la entrada en vigencia de la Ley 100, pudiera escoger a EPM para reconocer sus prestaciones ya que no está autorizada para administrar regímenes pensionales.

Dijo que es cierto lo dicho frente a la vinculación con EPM desde el 13 de septiembre de 1982 y en esta misma fecha fue afiliado al ISS hasta el 29 de diciembre de 1986, y luego, el 30 de junio de 1995 se afilió nuevamente al ISS en cumplimiento de la Ley 100 de 1993; que el ISS le reconoció la pensión de vejez; las reclamaciones efectuadas ante las demandadas y la respuesta negativa dada por EPM. Sobre los demás hechos dijo que no son ciertos y que no le constan.

En cuanto a las pretensiones de la demanda, se resistió a todas, y propuso como medios exceptivos los que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, subrogación total de EEPPM ESP en el ISS, contribución en la financiación de la pensión a través de las cotizaciones por los riesgos de IVM y el pago del bono pensional a que hubiera lugar, pago total, extinción total de la obligación, novación como extinción de la obligación y prescripción.

Ministerio de Defensa

Manifestó que no le constan los hechos de la demanda por ser ajenos al ministerio. Sobre las excepciones dijo que respeta lo pretendido dentro de la *litis* ya que no hay ninguna dirigida contra esta entidad; y, como excepciones de mérito propuso la de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Sentencia de primera instancia

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 25 de abril de 2022, absolvió a EPM ESP, a Colpensiones y al Ministerio de Defensa de la totalidad de las pretensiones de la demanda e impuso costas a cargo de la parte demandante.

Para adoptar tal decisión, consideró que el actor al 30 de junio de 1995, no se encontraba afiliado a una caja, fondo o entidad de previsión social sector público, por lo que al escoger el actor el RPM debía ser afiliado al ISS, como lo hizo su empleador, ya que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, de conformidad con el artículo 15, pasó a ser un afiliado obligatorio y no voluntario.

Agregó que EPM tiene como objeto la prestación de servicios públicos domiciliarios, y desde su naturaleza no se constituye en caja, fondo o entidad de previsión social, por lo cual debía cumplir con lo dispuesto en el sistema general de pensiones, afiliando a sus trabajadores al régimen que seleccionaran.

Apelaciones

La parte demandante afirmó que el asunto consiste en determinar si era obligatoria o no la afiliación de Jaime Alberto Villa Gil al ISS.

Consideró que la Ley 100 de 1993, fue creada para unificar los regímenes pensionales existentes y para ello, consagró que específicamente, en el caso de los servidores públicos, su aplicación era para los afiliados existentes o inactivos para darles una protección en los riesgos de vejez, invalidez o muerte. Y es que, de acuerdo a lo expuesto a la demanda, no se vio el alcance real del artículo 128 de la citada ley, que estableció que los servidores públicos activos podían ser afiliados o no al ISS, y ello se reiteró en la sentencia CC C584-1995; por lo que la elucubración jurídica sobre este punto está avanzada.

Solicitó al TSM, establecer que en el presente caso, se cumplían los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, y estaba bajo unas condiciones en las que el empleador podía jubilar a sus trabajadores, y de acuerdo con la motivación de las sentencias de la Corte Constitucional, la creación de la Ley 100 de 1993, no era camisa de fuerza para aquellas personas que a la entrada en vigencia ya tenía una expectativa de pensionarse bajo ciertas circunstancias, y para ello el artículo 128 era muy específico al establecer que esa obligación era para quienes no se encontraran afiliados y para el caso de las personas que las entidades empleadoras hubieran desaparecido, y esto tiene un alcance profundo porque es un matiz que no ha sido tenido en cuenta por la juez y es una consideración que no puede descartarse. Y si bien EPM no era una entidad ni una AFP ni caja, sin embargo, tenían a su cargo el reconocimiento de pensiones, y esto es lo que se está perdiendo de vista es ese análisis profundo, si en realidad era justificable o no que se le exigiera a un trabajador activo en una empresa que tenía a su cargo reconocimiento de pensiones haberlo obligado a ser afiliado al

ISS, por lo que solicita al TSM analizar el alcance y revocar la sentencia de primera instancia.

Alegatos

Colpensiones se ratificó en lo planteado en la contestación y en lo indicado ante la Juez de primera instancia, y solicitó que se confirme la sentencia argumentando que el accionante es beneficiario del régimen de transición y por ello esta entidad le reconoció una pensión de vejez bajo la Ley 33 de 1985.

Resaltó que el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 estableció la competencia general del ISS para administrar el RPMPD y a las cajas, fondos o entidades públicas que para entonces tenían a cargo pensiones, se les permitió continuar mientras subsistieran.

Afirmó que EPM es una EICE del orden municipal, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio y según sus estatutos, su objeto es la prestación de servicios públicos domiciliarios y no la administración del RPMPD; es decir, no puede reconocer y pagar pensiones; por lo cual, corresponde a Colpensiones el reconocimiento pensional del actor, ya que es la administradora del RPMPD que sustituyó al ISS, y de conformidad con el Decreto 2011 de 2012, tiene la competencia para conocer de las solicitudes de pensión que correspondan a este régimen, a partir de la fecha en que inició sus operaciones, esto es, 28 de septiembre de 2012.

Finalmente expone que, conforme al inciso 3 del artículo 128 de la Ley 100 de 1993 se considera que el demandante debía obligatoriamente afiliarse al ISS.

CONSIDERACIONES

Previo al análisis de las réplicas propuestas, se advierte que se encuentra fuera del debate probatorio que el ISS mediante Resolución 147477 del 20 de mayo de 2014, reconoció el pago de una pensión de vejez al actor bajo las premisas de la Ley 33 de 1985, en aplicación del

régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de \$1.363.011, a partir del 2 de noviembre de 2014, (fls.54-58 archivo 02Demanda), y que a su IBL se le aplicó una tasa de remplazo del 75%.

Con base en lo anterior, se revisará la sentencia apelada. Los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en determinar: (i) si es procedente declarar la ineficacia de la afiliación de Jaime Alberto Villa Gil al RPMPD administrado por Colpensiones, de conformidad con el artículo 128 de la Ley 100 de 1993, esto es, declarando que el actor es un afiliado facultativo, y en caso afirmativo; (ii) si es viable el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985 por parte de EPM ESP y las condiciones de la prestación; y de ser así; (iii) si es posible liquidar su IBL teniendo en cuenta lo devengado en el último año de servicios; y, (iv) la responsabilidad de Colpensiones respecto a la prestación de vejez del actor y la compensación.

(i) Ineficacia de la afiliación

Es necesario precisar que con la expedición de la Ley 100 de 1993, particularmente en lo que se refiere al subsistema de pensiones, se pretendió unificar los diferentes regímenes pensionales existentes y su administración, con el fin de hacerlo sostenible y equiparar a los distintos actores del mundo laboral, y para ello estableció dos regímenes solidarios y excluyentes; el de ahorro individual con solidaridad y el de prima media con prestación definida.

Y es que, con antelación a esto, las condiciones pensionales variaban dependiendo del empleador, pues había trabajadores del sector privado gobernados por el artículo 260 del CST en aquellos lugares donde el ISS no contaba con cobertura, y otros regidos por las disposiciones propias de este instituto.

En cuanto al sector público, la situación era aún más disímil, ya que si bien había una norma general, también se encontraba regulación propia para cada sector o entidad, consagrándose reglas particulares para la Rama Judicial, la Procuraduría, el INPEC, funcionarios de la seguridad social, entre otros, e igualmente existían regímenes

exceptuados que fueron protegidos por la Ley 100 de 1993 en su artículo 279, donde se registra las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el magisterio o Ecopetrol.

Ahora, para resolver el tema de estudio, considera la sala que es necesario hacer referencia a las normas que en su momento regulaban el tema.

Inicialmente se encuentra que el artículo 1° del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, dispone que:

«Estarán sujetos al Seguro Social obligatorio contra los riesgos de invalidez y muerte de origen no profesional y contra el riesgo de vejez;

- a. Los trabajadores nacionales y extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo presten servicios a patronos de carácter particular, siempre que no sean expresamente excluidos por la ley o por el presente reglamento;
- b. Los trabajadores que presten servicios a entidades empresas de derecho público semioficiales o descentralizadas cuando no estén excluidos por disposición legal expresa;»

Se emite luego el Decreto 433 de 1971 en su artículo 2° dispone:

«Estarán sujetos al Seguro Social Obligatorio en los términos del presente Decreto, las siguientes personas:

- a). Los trabajadores nacionales y extranjeros, que en virtud de un contrato de trabajo o de aprendizaje, presten sus servicios a patronos de carácter particular, siempre que no sean expresamente excluidos por la ley;

Sin embargo, los asegurados que tengan sesenta (60) años o más al inscribirse por primera vez en el Seguro no quedarán protegidos contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni habrá lugar a las respectivas cotizaciones.

- b). Los trabajadores que presten sus servicios a la Nación, los Departamentos y los Municipios en la construcción y conservación de las obras públicas, y todos los trabajadores de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, de carácter nacional, departamental o municipal, que para los efectos del Seguro Social Obligatorio estarán asimilados a trabajadores particulares.»

Posteriormente el Decreto 1650 de 1977, mediante el cual se establece el régimen general de los seguros sociales obligatorios, dispone como afiliados forzosos en el artículo 6° lo siguiente:

«Deberán afiliarse forzosamente al régimen que se establece en el presente Decreto, los trabajadores nacionales y extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, los funcionarios de seguridad social a que se refiere el Decreto 1651 de 1977, y los pensionados por el régimen de los seguros sociales obligatorios.»

Conforme lo establecido por esta última disposición, la vinculación para personas del sector público dejó de ser obligatoria en todos los casos, por tanto, la pensión como una prestación social debía ser garantizada por el empleador, bajo las normas que resultaren aplicables.

Este panorama presenta un cambio fundamental con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, momento para el cual ese carácter facultativo u opcional de afiliar los trabajadores oficiales al ISS llega a su fin y se prevé la obligatoriedad de hacerlo, tal como se desprende del artículo 15 original, que consagraba:

«Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales...»

Así pues, en cuanto a los servidores públicos, como es el caso del actor, dicha ley en su artículo 128, consagró la posibilidad de permanecer en la caja, fondo o entidad donde estuvieran afiliados, exponiendo:

«Los servidores públicos afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen al que deseen afiliarse, lo cual deberá informarse al empleador por escrito.

Los servidores públicos que se acojan al régimen de prestación definida, podrán continuar afiliados a la caja, fondo o entidad de previsión a la cual se hallen vinculados. Estas entidades administrarán los recursos y pagarán las pensiones conforme a las disposiciones de dicho régimen previstas en la presente Ley.

<Aparte subrayado **CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE**> Los servidores públicos que no estén afiliados a una caja, fondo o entidad de previsión o seguridad social, aquellos que se hallen afiliados a alguna de estas entidades cuya liquidación se ordene, y los que ingresen por primera vez a la fuerza laboral, en caso de que seleccionen el régimen de prestación definida, se afiliarán al Instituto de Seguros Sociales.

Los servidores públicos nacionales cualquiera sea el régimen que seleccionen, tendrán derecho a bono pensional.

PARÁGRAFO. La afiliación al régimen seleccionado implica la aceptación de las condiciones propias de éste, para acceder a las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes.»

La Corte Constitucional declaró exequible el aparte subrayado, en la Sentencia C 584-95, *“en el entendido de que éste rige en relación con los servidores públicos que no hubiesen manifestado su voluntad de continuar afiliados a la caja, fondo o entidad de previsión a la cual se hallaban vinculados, de conformidad con lo previsto en el inciso 2o. de la Ley 100 de 1993.”*

Ahora, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSJ SL113-2023, explica que el artículo 128 transcrito, previó que los servidores públicos que decidieran acogerse al régimen de prestación definida podían continuar afiliados a la caja, fondo o entidad de previsión a la cual estuviesen vinculados y que estas entidades administrarían los recursos y pagarían las pensiones conforme a las disposiciones de dicho régimen previstas en la ley.

A su turno, el artículo 6 del Decreto 692 de 1994 estableció:

“Para los efectos de este Decreto, se entienden por administradoras del Sistema General de Pensiones:

a) En el régimen de ahorro individual, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, o las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía, AFPC; y

b) En el régimen de prima media con solidaridad, el ISS y las demás cajas o entidades del sector público o privado que administran sistemas de pensiones, legalmente autorizadas y mientras no se ordene su liquidación.”

En el caso de estudio se observa que el demandante se vinculó a EPM el 13 de septiembre de 1982, y en esa fecha fue afiliado al ISS como se observa en la historia laboral aportada por Colpensiones en su contestación (PDF 13, fls.40-54), en la que además se evidencian cotizaciones previas con empleadores particulares. Y entre el 28 de diciembre de 1986 y el 30 de junio de 1995, cesó el pago de cotizaciones por parte de EPM, asumiendo en este intervalo la responsabilidad de las prestaciones sociales que eventualmente se causaran, en virtud de las normas expuestas, reactivando la afiliación el 1°. de julio de la misma calenda, es decir, un día después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para el sector público, y que su última cotización fue en agosto de 2014.

Cabe anotar que el actor desde el escrito de demanda afirma que, a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones para el sector público específicamente, no se encontrado afiliado a ninguna caja, fondo o entidad que tuviera a su cargo el reconocimiento de pensiones.

Y, en cuanto a la opción que alega el actor de permanecer en EPM afiliado para efectos del reconocimiento pensional y declarar la ineficacia de la nulidad al ISS, se destaca que el artículo 52 *ibidem*, asignó a ese instituto la competencia general para la administración del RPMPD y además, autorizó a las diferentes cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes en el sector público para que lo continuaran administrando «*respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan*», con el objeto de salvaguardar las

expectativas pensionales de quienes estaban ya afiliados, disponiendo expresamente que:

«El régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.

Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio de que aquéllos se acojan a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos en esta Ley.

Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, estarán sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria.»

Por lo anterior, es necesario precisar que EPM es una EICE cuyo objeto es la prestación de servicios públicos domiciliarios, según lo establecido en el artículo 3 de sus estatutos, la que está dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y capital independiente, de acuerdo con el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 1.º de los estatutos aprobados mediante Acuerdo Municipal 12 de 1998, y que se rige por las reglas de derecho privado salvo las excepciones consagradas expresamente en la Constitución Política, la ley y demás disposiciones reglamentarias, y sus actos y contratos, como empresa de servicios públicos, están regulados por la Ley 142 de 1994.

Queda claro entonces que EPM no se asimila a una entidad administradora del RPM, por tanto, al no entenderse incluida en este ámbito, no era posible que continuara con la administración del sistema pensional que tenía a su cargo, debiendo sustituir esta obligación en el ISS, como en efecto lo consideró la juez de instancia, dado que se trataba de un proceder que le resultaba imperativo por una orden legal.

Ahora, de conformidad con los fundamentos legales expuestos, no evidencia esta sala un comportamiento desconocedor de derechos o contrario a la norma por parte de EPM, quien por el contrario ha satisfecho las obligaciones que como empleador le correspondían, dado que procedió a reactivar la afiliación del demandante al ISS, en la

medida que para el momento en que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, no se había causado el derecho pensional en beneficio del actor y por tanto no podía desconocer el mandato legal que se le imponía, sin que se desconocieran derechos adquiridos, que no era el caso del actor, ya que dentro de la prueba documental se encuentra la copia de la cédula de ciudadanía del demandante aportada con la demanda a folio 19, donde se evidencia que nació el 22 de diciembre de 1957, cumpliendo 55 años en la misma fecha del año 2012, edad necesaria para acceder a la prestación de conformidad con la Ley 33 de 1985, siendo entonces inviable el reconocimiento de la declaratoria de ineficacia de afiliación al ISS efectuada en 1995, como en efecto lo consideró la juez de instancia.

En conclusión, considera la sala que la sentencia que se revisa por vía de apelación merece ser confirmada en su integridad.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo indicó el juez. Y las de la esta instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del CGP y por no salir avante la apelación formulada por el demandante, son de su cargo y en favor de EPM EPS y Colpensiones en un 50% para cada una. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

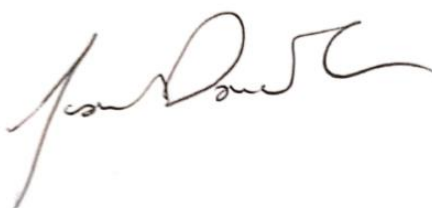
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por la Juez Trece Laboral del Circuito de Medellín, 25 de abril de 2022, en el proceso instaurado por Jaime Alberto Villa Gil en contra de EPM ESP, Colpensiones y Ministerio de Defensa.

Rdo. 05-001-31-05-013-2021-00109-01
117-22

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante a favor de EPM EPS y Colpensiones en un 50% para cada una. Se fijan como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1.160.000.

Se notifica lo resuelto por EDICTO. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación, se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados,



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ